

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, siete (07) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ
DEMANDADO :	: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP-
INTERVINIENTE EXCLUYENTE :	: INÉS RESTREPO DE VÉLEZ
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-006-2018-00210-01
RADICADO INTERNO	: 183-21
DECISIÓN	: CONFIRMAR, AUTORIZAR Y CONDENAR
ACTA NÚMERO	: 276

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

Pretende la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ se CONDENE a UGPP al reconocimiento y pago de la sustitución pensional y las mesadas adicionales por la muerte de su compañero permanente, el Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ; al pago de los intereses moratorios y/o la indexación; y las costas del proceso.

Las pretensiones de la demanda las fundamenta, en que al Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ se le reconoció pensión de jubilación por parte de CAJANAL, mediante resolución 681 de 1988, a partir del 16 de agosto de

1985, en cuantía mensual de \$47.335,99; dicha prestación fue reliquidada mediante resolución 4806 de 1988 en cuantía de \$54.160,68 a partir del 16 de agosto de 1985. El 11 de marzo de 1998, el Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ, le solicitó a CAJANAL, el traspaso de la pensión, conforme a la Ley 44 de 1980, a favor de su compañera permanente OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ.

El pensionado falleció el 13 de enero de 2017. Mediante resolución 009172 de 2017, la UGPP reconoció la sustitución pensional de manera provisional a partir del 14 de enero de 2017, a la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ; posteriormente, la UGPP expidió la resolución 0196345 de 2017, negando el reconocimiento de la sustitución pensional porque la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ en calidad de compañera permanente declaró haber convivido con el causante desde marzo de 1978 hasta el 13 de enero de 2017 y la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ en calidad de cónyuge, declaró que convivió con el causante desde 1954 hasta el 13 de enero de 2017, existiendo una convivencia simultanea que no se podía dirimir en instancia administrativa. Contra la anterior decisión se interpusieron los recursos de ley, y por medio de las resoluciones 030700 de 2017 y 027011 de 2017 se confirmó la decisión.

Los señores OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ y OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ iniciaron su convivencia en el año 1978, momento para el cual se encontraba separado de hecho de su cónyuge, y la convivencia se extendió hasta el 13 de enero de 2017, la cual fue de manera continua y sin interrupción alguna. La convivencia inició en Apartadó, en donde estuvieron por 6 meses, luego se trasladaron a Yarumal, donde permanecieron 3 meses, posteriormente se trasladaron al Barrio Castilla en Medellín, en donde convivieron por 15 años aproximadamente; con una herencia del padre de la demandante, compró una casa en el barrio La Milagrosa en donde vivieron 8 años y finalmente con la herencia de la madre de la demandante, compró un apartamento en las Torres de Bomboná en Medellín, en donde habitaron 16 años aproximadamente, lugar donde falleció su compañero permanente.

Afirmó la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ, que en escritura pública No. 2348 de 2009, el causante y ella, realizaron la declaratoria de la sociedad patrimonial de hecho y disolución de la misma, con el fin que la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ no fuera a reclamar algún derecho sobre

los bienes presentes o futuros de la demandante; en dicha escritura por error, se anotó que la convivencia inició en el año 1984, pero en realidad tuvo lugar desde el año 1978. Que por los padecimientos de salud que presentaba el Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ, debía ser hospitalizado, siendo la demandante quien lo acompañaba y brindaba apoyo, y la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ nunca lo cuidó ni visitó en su enfermedad. En la velación y el entierro del pensionado, solo asistieron 5 de sus hijos, sin que haya asistido la cónyuge. Fue la demandante, quien asumió el pago de los gastos funerarios del pensionado fallecido y mediante resolución 01758 de 2017 la UGPP reconoció el auxilio funerario.

Se expuso en la demanda, que la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ solicitó copia de la carpeta de sustitución pensional ante la UGPP y fue allí donde se enteró que el causante, antes de inscribirla como beneficiaria de la pensión, había anotado a quien fuera su cónyuge el 27 de septiembre de 1994, desconociendo las razones que tuvo su compañero permanente para hacerlo. Que la declaración extrajuicio aportada por la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ a la UGPP, es clara en indicar que el matrimonio con el causante fue el 16 de marzo de 1954, el cual estaba vigente al momento al momento de la muerte, pero convivieron hasta el mes de marzo de 1976, sin que existiera una convivencia simultanea como erradamente lo concluyó la UGPP para negar la prestación económica de la demandante, lo que da lugar al reconocimiento de la prestación económica solicitada, por ser la persona que se encontraba viviendo con el pensionado al momento de su muerte, por espacio de 39 años aproximadamente, mientras que la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ llevaba separada del pensionado, mas de 41 años.

Por medio de auto del 16 de julio de 2018, el Juzgado ordenó integrar a la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ en calidad de interviniente excluyente (fl. 112 del expediente digital).

En la respuesta a la demanda de la interviniente excluyente (fls. 143 a 156 del expediente digital), la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ dice que no le consta la fecha en que inició la convivencia de los señores OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ y OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ, no le consta si esta fue ininterrumpida o no ni los años que duró esa convivencia, pero advierte que en la escritura pública 2348 de 2009, el causante y la demandante afirmaron bajo la gravedad del juramento, que la

unión se dio a partir del año 1984 y no del año 1978. Acepta los demás hechos de la demanda. Asegura la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ que para el año 1978, ella se encontraba separada de hecho de su cónyuge, situación que se dio desde el mes de marzo de 1976, fecha en que el Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ la abandonó y quedando ésta a cargo de la manutención y cuidado de 7 hijos, pero el vínculo matrimonial y la sociedad conyugal de la pareja nunca fue disuelta, y por ende, se mantuvo hasta la fecha del fallecimiento del pensionado. Solicitó se negaran las pretensiones de la demanda de la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ.

La Sra. INÉS RESTREPO SUAZA QUINTERO presenta demanda en contra de la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ y de la UGPP (fls. 201 a 212 del expediente digital), solicitando se CONDENE a la UGPP al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente y las mesadas adicionales, por el fallecimiento de su cónyuge, el Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ, a partir del 14 de enero de 2017; al pago de los intereses moratorios o en subsidio la indexación; se condene a las demandadas al pago de costas procesales. Y como **pretensión subsidiaria**, solicita se CONDENE a la UGPP al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en su calidad de cónyuge, a partir del 14 de enero de 2017, en proporción al tiempo de convivencia con el causante, teniendo en cuenta que la pareja compartió techo, lecho y mesa en forma continua e ininterrumpida por 22 años.

Sustenta sus pretensiones, exponiendo que contrajo matrimonio con el Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ el 16 de marzo de 1954; de esa unión procrearon 10 hijos; la pareja compartió techo, lecho y mesa por 22 años en forma continua e ininterrumpida, desde el matrimonio y hasta el mes de marzo de 1976, oportunidad en que se dio una separación de hecho que se generó por el abandono del Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ a su cónyuge. El causante fue pensionado y falleció el 13 de enero de 2017; al momento de la muerte, la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, la cual fue reconocida en forma provisional en un 100%, no obstante, atendiendo que la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ en calidad de cónyuge solicitó el reconocimiento de la prestación económica, la entidad accionada dispuso negar la pensión de sobreviviente a ambas peticionarias. De acuerdo a la declaración extrajudicial rendida el 13 de marzo de 2017, y que reposa en el

expediente administrativo, la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ manifestó haber contraído matrimonio con el causante el 16 de marzo de 1954 hasta el 13 de enero de 2017 para significar que el vínculo matrimonial nunca fue disuelto y no para señalar la convivencia ininterrumpida hasta el deceso, como erradamente los interpretó la entidad demandada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 2 de junio de 2021, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ el derecho de la señora INÉS RESTREPO DE VÉLEZ, en calidad de conyugue supérstite y de la señora Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ, en calidad de compañera permanente, a la sustitución de la pensión de jubilación del señor OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ, en un 50% a favor de cada una, y a cargo de la UGPP.

Le ORDENÓ a la UGPP, pagar retroactivamente desde la fecha de causación, a cada una de las citadas beneficiarias, el 50% del valor de la pensión de jubilación que devengaba el señor VÉLEZ VELÁSQUEZ, en forma indexada desde la fecha de resolución que confirmó la decisión de suspensión del pago de la prestación pensional y hasta cuando se cumpla con el pago, previa deducción del porcentaje con destino al sistema de salud. Y no condenó en costas.

IMPUGNACIÓN

La apoderada de la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ apela la absolución de los intereses moratorios y de las costas procesales, argumentando frente a los primeros, que la UGPP es responsable de su reconocimiento, al realizar una mala interpretación de la declaración extrajuicio, toda vez que su representada informó que la unión marital de hecho estaba vigente y así fue hasta el momento de la muerte, porque lo que quiso decir, es que ella nunca liquidó ni disolvió esa sociedad conyugal, siendo la entidad accionada la que mal interpretó; que el hecho de llegar a estas instancias, cuando se trata de una persona de la tercera edad, son maniobras dilatorias que buscan que una vez se constituya el derecho no sea reclamado.

Adicionalmente, considera que le asiste responsabilidad a la UGPP, porque siempre asisten con un preformato de “no conciliación” sin mirar las circunstancias del caso.

Y las costas y agencias deberían ser tenidas en cuenta, porque en la primera audiencia se abrió la posibilidad de efectuar la conciliación.

Por su parte, la apoderada de la UGPP, sustenta su recurso, argumentando que las partes no aportan las pruebas necesarias para acreditar su derecho en sede administrativa; ambas alegaban haber tenido una convivencia simultanea con el causante, presentándose inconsistencias en sus afirmaciones, conducta que dio lugar a la aplicación automática de los dispuesto en el art. 6º de la Ley 1204 de 2018.

El pensionado falleció en el año 2017, lo que hace que la norma aplicable sea el art. 47 de la Ley 100 de 1993, y de conformidad con las pruebas aportadas en el trámite administrativo de reconocimiento y pago de la pensiones, la investigación de campo y las pruebas practicadas dentro de este proceso se logra establecer que hay inconsistencias en la extensión y duración de la convivencia efectiva del causante con cada una de las reclamantes, a sabiendas que la carga de la prueba recaía en cabeza de la parte interesada.

Frente a la parte interviniente excluyente, expresa que se debe tener en cuenta, que la convivencia se rompió a partir de la separación que tuvo lugar desde el año 1976 y para este caso es claro que no existió auxilio mutuo, apoyo económico y convivencia desde hacía más de 40 años, por lo que no hay lugar al reconocimiento. Y en lo que respecta a la demandante, se debe tener en cuenta, que tenía un vínculo matrimonial con otra persona y existió una disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre ella y el causante. Por lo tanto, en este caso no se demuestra la convivencia, solidaridad y ayuda mutua que haya perdurado hasta el momento que haya fallecido el causante, ni se acreditan los requisitos que exige la norma para el reconocimiento pensional.

Finalmente, solicita que, al momento de resolver el fondo de este asunto, se tenga en cuenta el art. 4 de la Ley 44 de 1980, norma que ordena las compensaciones a las que haya lugar en contra de los beneficiarios inicialmente reconocidos, sin que en ningún momento pueda ordenarse un doble pago en contra de su representada por haber obrado conforme a la normatividad.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ manifestó que no iba a hacer uso de los alegatos de conclusión.

La apoderada de la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ solicita se confirme la decisión de primera instancia y se modifique la sentencia para en su lugar reconocer los intereses moratorios y las costas procesales.

Lo anterior sustentado, en haber quedado probado, que su representada estuvo casada hasta el momento de la muerte del Sr. ÓSCAR DE JESÚS VÉLEZ VÁSQUEZ, nunca se disolvió ni liquidó la sociedad conyugal ni el vínculo marital; se dio una convivencia por 22 años, y que de esa unión se procrearon 10 hijos, afirmaciones que no fueron objeto de debate probatorio, ni tachadas de falsedad material o ideológica y que fueron confesados por el apoderado de la compañera permanente en la demanda.

Se cumplieron las exigencias establecidas por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, ello es, la pensión de vejez se dio a través de la Resolución 06981 de 1986, y de ella se extrae que el causante inició su vida laboral en el año 1951 hasta el año 1985, fecha en la cual inició los trámites pensionales; se probó la convivencia de la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ desde 1954 hasta el año 1976, por lo que contribuyó a la construcción de la pensión de vejez; la interviniente tuvo una convivencia, comunidad de vida en el amor responsable, ayuda mutua, apoyo económico, asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual; procrearon 10 hijos en los 22 años de matrimonio, compartió un proyecto de vida y relaciones de intimidad y dependencia emocional y se suministraron los elementos fundamentales para suplir las necesidades básicas; la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ, contribuyó a la construcción de la pensión; y los 5 años de convivencia están probados con la convivencia por 22 años.

Reitera que la confusión radica en una mala interpretación realizada por la UGPP de la declaración extra juicio de la interviniente, porque se declaró que la sociedad conyugal se encontraba vigente, porque nunca se disolvió; hace referencia frente a la protección que otorga el vínculo matrimonial.

En lo que respecta a las costas y agencias en derecho, solicita que se debe tasar una cifra que se compagine con las declaraciones realizadas teniendo

en cuenta que la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ, al momento de la sentencia, cuenta con 90 años de edad, por lo que goza de una especial protección, la UGPP interpuso una apelación sin argumentos, pues sus presupuestos fueron discutidos en el proceso de instancia donde se acreditaron los requisitos que exige la Ley 797 del 2003 y lo establecido en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional; así mismo, la accionada ya había otorgado la pensión, y fue ella quien, por una mala interpretación, llevó el proceso a instancias jurisdiccionales y con la interposición de este recurso, dilatan un derecho que eventualmente no podrá disfrutar mi representada por su edad; las costas no se pueden desconocer bajo el argumento de la sostenibilidad financiera, porque no se pueden aplicar objetivamente los lineamientos de las entidades públicas sin analizar específicamente las condiciones del caso.

Y frente a los intereses moratorios, considera que estos corresponden por la indemnización de perjuicios causados toda vez que el pensionado falleció el 13 de enero de 2017, sin que la interviniente haya recibido la mesada causada, que le corresponde al 50%, lo que ha generado perjuicios al no satisfacer su derecho, la demandante crió a 10 hijos y el abandono del hogar se dio por razones ajenas a su voluntad.

La apoderada de la UGPP solicita la revocatoria de la sentencia con fundamento en los arts. 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, porque de ellos se extrae que no solo se exige la convivencia continua e ininterrumpida de quienes tengan vivo y actuante su vínculo matrimonial, mediante el auxilio mutuo, entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y vida en común, la cual es entendida en estados de separación impuesta por la fuerza pero que no existe de las parejas que permanecieron separados de hecho por largo tiempo. La Corte ha señalado que si desaparece la vida en común de la pareja y el vínculo afectivo se deja de ser miembro del grupo familiar; lo anterior lo sustenta en las sentencias 22560 de 2005, SL 4835 de 2015, SL 1730 del 2020; sentencia C 111 de 2006, C 1094 de 2003. Y respecto a los requisitos para que el cónyuge o compañero(a) permanente acceda a la pensión de sobreviviente, son "acreditar que estuvo: haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haber convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte", lo cual sustenta en las sentencias T 030 de 2013.

Con la anterior, se pretende restringir el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los miembros del grupo familiar que requieren efectivamente de la prestación económica para satisfacer sus necesidades básicas y el acatamiento de las condiciones señaladas para cada beneficiario, según el orden de prelación para la protección de los intereses del grupo familiar.

Con las pruebas recaudadas existen inconsistencias acerca de la extensión y la duración de la convivencia efectiva del causante con cada una de las reclamantes sin que esté probado suficientemente la veracidad del derecho pretendido, siendo esta circunstancia carga probatoria exclusiva de la parte interesada. Con la interviniente, la convivencia se rompió en el año 1976 siendo claro que no existía auxilio mutuo apoyo económico y convivencia desde más de 40 años, sin que haya lugar al reconocimiento de la prestación económica. Y la demandante, tenía un vínculo matrimonial con otra persona y existió liquidación disolución de la sociedad patrimonial entre la demandante y el causante.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico se centra en determinar: i) Si las señoras INÉS RESTREPO DE VÉLEZ en calidad de cónyuge, y OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ en calidad de compañera permanente, lograron acreditar los requisitos necesarios para ser beneficiarias de la sustitución pensional por la muerte del Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ; ii) Si la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios y de la condena en costas; y iii) Si hay lugar a que se aplique la compensación consagrada en el art. 4 de la Ley 44 de 1980.

No es objeto de discusión que los señores OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ y INÉS RESTREPO DE VÉLEZ contrajeron matrimonio 16 de marzo de 1954 según la partida de matrimonio y los certificados expedidos por la Notaría Primera de Medellín, visible a fls. 162 a 164 del expediente digital; que el Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ recibió pensión de jubilación por medio de la resolución 7346 de 1985, a partir del 16 de agosto de 1985 (fls. 26 a 29 y 157 a 159 del expediente digital) y por medio de resolución 4806 de 1988 se reliquidó la pensión de jubilación al Sr. VÉLEZ VELÁSQUEZ (fls. 31 a 34 del expediente digital); la Sra. OLINDA

ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ era beneficiaria del sistema de seguridad social en salud, del pensionado, desde el 26 de abril de 1996 hasta el 6 de octubre de 2002, según certificado emitido por CAJANAL EPS (fl. 23 del expediente digital); los señores OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ y OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ inscribieron el 13 de julio de 2009, ante la registraduría del estado civil, escritura pública 2348 de julio de 2009, por medio de la cual se generó la declaratoria de unión y liquidación patrimonial de hecho (fl. 71 del expediente digital).

El pensionado falleció el 13 de enero de 2017, según el registro civil de defunción de fl. 19 del expediente digital; la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ solicitó el reconocimiento de la sustitución pensional, el cual fue reconocido provisionalmente en la resolución 9172 de 2017, a partir del 14 de enero de 2017 (fls. 84 y 85 del expediente digital); por medio de resolución 19.645 de 2017 se negó la prestación económica por existir conflicto entre las solicitantes, respecto a la convivencia con el causante (fls. 89 a 94), decisión confirmada por las resoluciones 30.700 de 2017 y 27.011 de 2017 (fls. 95 a 102).

1. De los requisitos para la sustitución pensional

En el presente caso, se tiene claro que al haber fallecido el Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ el 13 de enero de 2017 el cual ostentaba la calidad de pensionado, no existe discusión en lo que respecta a haber dejado causado el derecho al reconocimiento de la prestación económica a sus beneficiarios.

En lo relativo a los beneficiarios, la normatividad aplicable al caso concreto es el art. 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 13 de la L. 797 de 2003, el cual señala que:

*“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos **de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.***

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de

edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; (...) (Negrilla fuera del texto)

Respecto a los cónyuges separados de hecho, la nueva postura de la Corte Suprema de Justicia, es que solo debe **acreditar los 5 años de convivencia en cualquier tiempo** sin que sea necesario demostrar el vínculo actuante, tal y como se consagra en la sentencia SL 1476 de 2021, de la cual se extrae:

*“En tal sentido, el cónyuge con vínculo marital vigente, aun separado de hecho, puede reclamar válidamente una pensión de sobrevivientes siempre que haya convivido con el pensionado fallecido **por lo menos 5 años en cualquier época**, pues de esta manera se protege a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional del causante, en virtud del principio de solidaridad que rige el derecho a la seguridad social.*

*Por lo demás, conviene precisar que lo que **habilita al cónyuge separado de hecho o de cuerpos a acceder a la pensión de sobrevivientes es la vigencia o subsistencia del vínculo matrimonial**, por manera que, otras figuras del derecho de familia, tales como la separación de bienes o **la disolución y liquidación de la sociedad conyugal no son relevantes frente a la adquisición del derecho** (SL5141-2019).*

*Igualmente, que no es requisito o condición legal que entre el causante y el cónyuge supérstite se mantengan lazos o relaciones de amistad, trato, comunicación, apoyo o de cualquiera otra naturaleza, pues no es el término que se extiende hasta la muerte de aquél el que le da el derecho a la prestación pensional, **sino el término en el que se hubiere establecido de manera regular la convivencia** cuya*

pérdida resulta de ordinario generando el rompimiento de cualquiera otra forma de relación y comunicación, situación que el legislador en modo alguno desconoció. (...) ” (Resalto fuera del texto)

Y en sentencia SL 997 de 2021, la Corte Suprema de Justicia casó la sentencia en la que se negó la sustitución pensional a la cónyuge separada de hecho, por no haber probado que después de la separación existió un auxilio mutuo, con fundamento en lo expresado en la sentencia SL 5169 de 2019 que sostiene:

*“Precisamente, la no existencia de lazos de afecto frente a una persona con la que convivió, pero que por alguna circunstancia ya no forma parte de su vida, **no puede convertirse en una causal para negar un derecho**, máxime cuando la ley a cuya interpretación se apela para tal desconocimiento, no contempla ese requisito. Incluso si estableciera como exigencia tal paradigma decimonónico, que sería absolutamente contrario a los principios de igualdad y de equidad de género que establece nuestro ordenamiento constitucional, se haría más imperiosa la necesidad de su adecuación judicial a través de la interpretación para ampliar las categorías de protección a aquellas situaciones que no contempla la norma.*

Así las cosas, a juicio de la Sala, el Tribunal restringió la norma analizada al concluir que la demandante no acreditó que para el momento de la muerte del causante existía algún tipo de «vínculo afectivo», «comunicación solidaria» y «ayuda mutua» que permita considerar que los «lazos familiares siguieron vigentes», luego de la separación de hecho, en razón a que tal requisito no lo contempla la disposición en referencia.”

Visto lo anterior, esta Sala acoge esta postura de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de no exigirse a la cónyuge separada de hecho, demostrar el vínculo actuante con posterioridad a la separación referida.

En consecuencia con lo anterior, respecto al requisito de la convivencia de los señores Sr. OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ y INÉS RESTREPO DE VÉLEZ, se encuentra acreditado en el plenario:

1º) Que el matrimonio tuvo lugar el **16 de marzo de 1954** según partida de matrimonio y certificados emitidos por la Notaría Primera de Medellín;

2º) En escritura pública 2.348 del 13 de julio de 2009, por medio de la cual se declaró la unión marital de hecho entre los señores OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ y OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ, y se disolvió y liquidó sin bienes, de ella se extrae que la unión marital de esa pareja inició en el **mes de enero de 1984**, y

3º) En la declaración extrajuicio rendida por la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ el 13 de marzo de 2017, confesó *“Que desde el mismo día del matrimonio y hasta el mes de marzo del año 1976, compartimos lecho, techo y mesa y de nuestra relación tuvimos 10 hijos, de los cuales 7 continúan vivos”* (fl. 104 del expediente digital); y la anterior confesión continúa siendo sostenida por la interviniente excluyente, en el hecho 3º de la demanda que presentó, la manifestar *“Mi prohijada y su cónyuge compartieron techo, lecho y mesa durante 22 años en forma continua e ininterrumpida, esto es desde la fecha de su matrimonio hasta el mes de marzo del año 1976”*.

De la anterior prueba documental y de la confesión de la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ se desprende, que los cónyuges convivieron aproximadamente 22 años, lo que hace que se supere con creces los 5 años de convivencia en cualquier tiempo, razón por lo que se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia que la reconoce como beneficiaria de la sustitución pensional solicita, pero por las razones analizadas en esta providencia.

Y en lo que respecta a la convivencia de los señores OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ y OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ, en los 5 años anteriores a la muerte del pensionado, de ello no existe discusión alguna, teniendo en cuenta que por medio de la resolución 9172 de 2017, la UGPP reconoció en forma provisional la sustitución pensional a la compañera permanente por haber acreditado la convivencia con el causante desde **febrero de 1978 hasta el 13 de enero de 2017**.

Por otro lado, la A Quo consideró que la convivencia inició en **el año 1996**, teniendo en cuenta la incoherencia existente entre la declaración notarial rendida por los señores OSCAR DE JESÚS VÉLEZ VELÁSQUEZ y OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ el 2 de noviembre de 2002, en donde indicaron una convivencia de 23 años (ello es, desde noviembre de 1979) y posteriormente en la escritura pública 2.348 de 2009 indicaron que la convivencia era desde enero de 1984. Por otra parte, en los certificados de CAJANAL se demuestra que la demandante tiene **la calidad de beneficiaria en salud del pensionado desde el 26 de abril de 1996**; también obra solicitud a CAJANAL, del 6 de marzo de 1998 donde el Sr. VÉLEZ VELÁSQUEZ autorizó el traspaso de la pensión de jubilación en caso de muerte, a la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ en

calidad de compañera; con el documento de la demandante que reposa a fl 35 del expediente digital, se evidencia que la demandante antes de iniciar convivencia con el causante tenía la condición de casada, porque aparecer en la cédula con el nombre de OLINDA ANTONIA ALMANZA DE PÉREZ; y existe solicitud elevada por el pensionado a CAJANAL el 27 de septiembre de 1994 para que en caso de su muerte, la pensión de jubilación se le traspasara a la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ en calidad de cónyuge.

Teniendo en cuenta las pruebas aportadas al plenario, en virtud de reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPL), considera la Sala que la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ logró acreditar la convivencia exigida en la norma, con base en las pruebas relacionadas en primera instancia, y adicionalmente, con fundamento en las declaraciones extrajuicio rendidas por las señoras SONIA MARÍA OSORIO GÓMEZ y ETILSA MARÍA AYALA PACHECO las cuales son concordantes en manifestar que conocen a la pareja hace 30 y 20 años aproximadamente, y que tienen conocimiento que la pareja convivía en unión libre desde hace 40 años y que la pareja vivió bajo el mismo techo de manera permanente, hasta el día del fallecimiento y con las historias clínicas del, 3 de noviembre de 2016 y 7 de enero de 2017 en donde se dejó constancia que el pensionado vivía en unión libre y la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ era la acompañante y/o persona responsable, debiéndose advertir, que no se hará pronunciamiento respecto a los periodos en los cuales se presentaron ambas convivencias, luego de que en primera instancia se haya determinado que tanto la demandante como la interviniente excludendum, tienen derecho al 50% de la sustitución pensional y frente a dicho pronunciamiento no existió oposición por ninguna de las partes procesales.

2. De la improcedencia de los intereses moratorios

No se accederá al reconocimiento a la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ de los intereses moratorios, teniendo en cuenta que en el presente evento, la pretensión de la demanda planteada por la cónyuge se dirigía al reconocimiento y pago del 100% de la sustitución pensional y en forma subsidiaria solicitó su reconocimiento en proporción al tiempo de convivencia con el causante, debiendo ser la justicia ordinaria la encargada de determinar si era beneficiaria o no de la prestación económica y si tenía

derecho a la pensión en su totalidad, lo que hace que la UGPP no haya incurrido en mora en el pago de la sustitución pensional solicitada.

3. Frente a la compensación ordenada en el art. 4 de la Ley 44 de 1980

La norma en mención establece lo siguiente: “... *En caso de que los beneficiarios iniciales tuvieran que hacer **compensaciones** a los nuevos por razón de las sumas pagadas, así se ordenará en la Resolución y lo ejecutará la entidad pagadora.*”, sin embargo en las contestaciones de la demanda, la UGPP no propuso la excepción de compensación que invoca en el recurso de apelación, por lo tanto, no es posible que sea declarada de manera oficiosa, a la luz de lo establecido en el art. 282 del CGP.

Pese lo anterior, no se puede pasar por alto la existencia del principio general del derecho del enriquecimiento sin causa, frente al cual la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 54001-3103-006-1999-00280-01 de 2012 se pronunció de la siguiente manera:

“El principio del enriquecimiento sin causa (unjust enrichment; enrichissement sans cause; ungerechtfertigte Bereicherung; L’Arricchimento senza causa), originado en el Derecho Romano, encuentra plenitud conceptual en el aforismo de Pomponio –recogido en el Digesto 50.17.206-, según el cual “por derecho natural es equitativo que ninguno se haga más rico con detrimento de otro y con injuria” (lure naturae aequum est, neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiores), o en palabras del mismo jurisconsulto, “es de justicia natural que nadie se enriquezca a costa de otro” (Nam hoc natura aequum est neminem cum alterius detrimento fieri locupletiores, Digesto 12.6.14), y ha sido recibido desde la antigüedad por diversos sistemas jurídicos.

*Autorizada doctrina reporta las conditiones romanas –**remedios otorgados para corregir determinadas injusticias derivadas de actos válidos**– como manifestaciones originarias de la institución bajo estudio, particularmente, la condictio ob causam datorum o condictio causa data causa non secuta, establecida para los casos de disminución patrimonial a causa de una promesa o condición futura y lícita que no se llegaba a cumplir, o por una prestación derivada de un contrato real innominado que no se satisfizo; la condictio indebiti, otorgada a aquel que pagaba por error una deuda inexistente; la condictio ob turpem causam, instaurada para los eventos en que se había efectuado o prometido una prestación con causa inmoral; la condictio ob iniustam causam, aplicable cuando la prestación satisfecha no contradecía la moral pero sí al derecho, y la condictio sine causa, **para todas las demás situaciones de desequilibrio patrimonial inequitativo** –dentro de la que encajaba la actio de peculio o in rem verso, en principio concebida para aquellos que contrataban con un alieni iuris no autorizado por el pater familias,*

pero con el paso de los siglos considerada como el remedio “universal para corregir el enriquecimiento sin causa”- (J. Fábrega P., El enriquecimiento sin causa, Ed. La Estrella de Panamá, 1955).

(...)

*No obstante lo anterior, es decir, a pesar del tardío reconocimiento explícito de la institución, la jurisprudencia de la Corte, además de abundante, **ha sido pacífica en cuanto a la ocurrencia, regulación y corrección del desequilibrio inequitativo que el enriquecimiento sin causa genera, encaminándose “a prevenirlo o corregirlo (...)** con preocupación justísima y creciente, de suerte que en la actual es mucho mayor la amplitud de las acciones o recursos de esa clase que la que hubo entre los romanos, por ejemplo, sin desconocer cómo ellos establecieron los varios de que son muestra la excepción y también acción de dolo, la condictio, en sus múltiples conceptos, etc.” (Sent. Cas. Civ. de 19 de septiembre de 1936, G.J. 1918, p. 435)."*

Principio que se está llamado a ser salvaguardado por la administración de justicia, cuando se trata de la UGPP, la cual, en el presente caso, administra dineros que en su oportunidad, fueron aportados por los trabajadores y empleadores para realizar el pago de las prestaciones económicas de vejez, invalidez y muerte.

En consecuencia, del expediente digital se extrae, que en la resolución con radicado SOP201801008048 se determina, que la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ adeuda al sistema general de pensiones la suma de \$21.718.361 por concepto de mayores valores de mesadas pensionales recibidas desde el mes de febrero de 2017 al mes de noviembre de 2017, sin embargo, dicha resolución no cuenta con fecha de emisión ni con firma de notificación de dicho acto administrativo a la hoy demandante, y no existe prueba de las consignaciones realizadas a la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ toda vez que desde la resolución 19.645 del 12 de mayo de 2017 la prestación económica fue negada, luego que la cónyuge elevara reclamación de la prestación económica.

No obstante, en aplicación del principio general del derecho del enriquecimiento sin causa, en caso de haberse realizado el pago de dichas mesadas pensionales a la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ, se AUTORIZARÁ a la UGPP, para que del retroactivo adeudado y reconocido en esta sentencia, descuente el valor pagado por concepto de sustitución pensional.

4. De las costas procesales a cargo de la UGPP y a favor de la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ

Se accederá a su reconocimiento, teniendo en cuenta que el art 365 del CGP reconoce costas “1. ... a la parte vencida en el proceso...” y en este evento, se condenó a la UGPP al reconocimiento de la prestación económica solicitada en forma subsidiaria por la interviniente, por lo tanto, al tratarse de una condena objetiva, hay lugar a al reconocimiento de las mismas, en primera instancia.

Costas en esta instancia, a cargo de la UGPP en la suma de \$908.526 a favor de la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ y la suma de \$908.526 a favor de la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ, por no haber salido avante el recurso interpuesto.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, **pero por las razones expresadas** en la presente providencia.

SEGUNDA: AUTORIZAR a la UGPP, para que del retroactivo pensional reconocido en esta sentencia a la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ, descuente el valor pagado por concepto de sustitución pensional.

TERCERO: CONDENAR en costas a la UGPP en primera instancia, a favor de la INÉS RESTREPO DE VÉLEZ.

CUARTO: Costas en esta instancia, a cargo de la UGPP en la suma de \$908.526 a favor de la Sra. OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ y la suma de \$908.526 a favor de la Sra. INÉS RESTREPO DE VÉLEZ, por no haber salido avante el recurso interpuesto.

QUINTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la sentencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : OLINDA ANTONIA ALMANZA VÁSQUEZ
DEMANDADO : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP-
INTERVINIENTE EXCLUYENTE : INÉS RESTREPO DE VÉLEZ
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL : 05-001-31-05-006-2018-00210-01
RADICADO INTERNO : 183-21
DECISIÓN : CONFIRMAR, AUTORIZAR Y CONDENAR

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 08 de octubre de 2021 a las
8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 08 de octubre de 2021 a la 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO